

**AVANTPROJECTE DE LLEI D'ACCÉS
A L'ADVOCACIA**

DOCUMENT INFORMATIU CG 38/1 2006

Secretaria General
Febrer de 2006



PROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La regulación del régimen de acceso a la profesión de Abogado en España es una exigencia derivada del artículo 24 y 17.3 de la Constitución: estos profesionales son colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, y la calidad del servicio que prestan redunda directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía.

Esta Ley constituye, por tanto, complemento de lo dispuesto al efecto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que consagra la función de los Abogados, a los que reserva la dirección y defensa de las partes, de modo que a los mismos corresponde garantizar la asistencia letrada al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando así lo exija la norma procesal y, en todo caso, como derecho a la defensa expresamente reconocido por la Constitución. La asistencia del Abogado, conforme al concepto amplio de tutela al que debe aspirarse, comprende también las actuaciones profesionales tendentes a evitar el proceso mediante fórmulas preventivas y compositivas así como, en general, el asesoramiento en Derecho.

También el Procurador, al que la LOPJ otorga la representación de las partes cuando así lo establezca la norma procesal, garantiza la asistencia jurídica, siendo, pues, imprescindible prever también los requisitos necesarios para el acceso a esta profesión, en línea con la tradición que ya existió en España.

La experiencia del Derecho comparado muestra que la actuación ante los Tribunales de Justicia y las demás actividades de asistencia jurídica requieren la acreditación previa de una capacitación profesional que va más allá de la obtención de una titulación universitaria. Ello justifica la regulación de dos títulos profesionales complementarios al título universitario en Derecho: el título profesional de Abogado, exigible para prestar asistencia jurídica utilizando la denominación de Abogado; y el título profesional de Procurador, exigible para actuar ante los Tribunales en calidad de tal.



Además, en una Europa que camina hacia una mayor integración, se hace imprescindible la homologación de estas profesiones jurídicas, en orden a garantizar la fluidez en la circulación y el establecimiento de profesionales, uno de los pilares del mercado único que constituye base esencial de la Unión Europea.

II

Debe recordarse que la necesaria capacitación profesional de estos colaboradores en el ejercicio de la tutela judicial efectiva ha sido una reivindicación constante de los representantes de las profesiones. Todos los Congresos de la Abogacía Española, de manera significativa el de León de 1970, el de Palma de Mallorca de 1989, el de la Coruña de 1995, el de Sevilla de 1999 y el de Salamanca de 2003, y las reuniones de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados desde Santander en 1994, Girona en 1997, Valencia en el 2001 y Santa Cruz de Tenerife en el 2005, expresando el sentir unánime de la Abogacía española, han reivindicado la garantía de una formación inicial igual para todos los profesionales de la Abogacía. En particular, en el VI Congreso de la Abogacía Española se destacó la importancia fundamental de la formación profesional práctica y la necesaria homogeneidad en la evaluación de tal capacitación para equipararse a los profesionales de la Unión Europea, instando la regulación de la materia por parte de los poderes públicos. También las segundas Jornadas de las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados de 1997 aprovecharon la entrada en vigor de la regulación sobre asistencia jurídica gratuita para insistir en esta cuestión, dando un paso más con el establecimiento del Certificado de aptitud profesional, que, aun voluntario, es exigido por los Colegios para la inclusión del profesional en el turno de oficio.

La Procura también ha insistido en la materia. En su X Congreso Nacional del año 2000 , se señaló que debe regularse “el acceso al ejercicio de la profesión de Procurador, homologándola al resto de los países de la Unión Europea, sin perjuicio de la función específica de cada profesión”, lo que se reiteró, como ejemplo, en el VII Congreso Internacional del Comité de Postulantes de Justicia Europeos, celebrado en Mallorca en el año 2004 .

Otros operadores jurídicos se han mostrado sensibles a la cuestión. El propio Libro Blanco de la Justicia presentado por el Consejo General del Poder Judicial en 1997 reclamó la capacitación práctica de estos profesionales. Asimismo, las Conclusiones de la X Conferencia de Decanos y Decanas de las Facultades de Derecho de las Universidades Españolas, reunida en Vigo el día 28 de junio de 2004 señalaron “la asunción de la necesidad y urgencia de regular el acceso a las profesiones de abogado y de procurador”, añadiendo que el modelo debía contemplar “esencial y principalmente la superación de cursos de contenido práctico, a programar, organizar e impartir conjuntamente por las Facultades de Derecho y Colegios de Abogados”, haciendo referencia complementaria a la posibilidad de una prueba objetiva final.



Y, de modo muy significativo, el Pacto de Estado sobre la Justicia del año 2001 se refirió también a la cuestión en su punto 20, previendo “fórmulas homologadas con los países miembros de la Unión Europea para garantizar la preparación para el ejercicio de la profesión”.

III

El texto subraya la importancia de la formación práctica de los profesionales, de modo que quede garantizada de forma objetiva su capacidad para prestar la asistencia jurídica constitucionalmente prevista.

A tal fin, conjuga la idoneidad formativa de la Universidad con el acervo de experiencia de los Colegios Profesionales. Debe destacarse que la colaboración entre Universidades y Colegios Profesionales es una de las claves del sistema. Manifestación significativa de ello es que los cursos de formación requieran un periodo de prácticas profesionales externas cuya existencia se asegura mediante el correspondiente convenio entre la Universidad y los Colegios Profesionales.

El reconocimiento a efectos profesionales de la formación práctica adicional al grado en Derecho permite coordinar e integrar el proceso con el sistema de estudios universitarios, con el que, si embargo, y con pleno respeto a la autonomía universitaria y a su regulación sectorial, no se interfiere. Ahora bien, tal y como prevé ya la regulación universitaria, no puede prescindirse en este caso del establecimiento de criterios a los que deberán sujetarse los estudios universitarios a los efectos de posibilitar el acceso a la obtención de los títulos profesionales que se regulan. A tal fin se dispone la necesaria acreditación de los contenidos formativos conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia, con la decisiva exigencia de prácticas externas, profesorado especialmente cualificado para la impartición de esta formación de contenido práctico, etc.

Por otra parte, el modelo no puede obviar la realidad de la existencia de numerosas y prestigiosas Escuelas de Práctica Jurídica para Abogados, cuya integración en el sistema descrito se produce por su necesario concierto con las Universidades.

En todo caso, para garantizar de forma objetiva la capacitación profesional del Graduado en Derecho así formado, se incluye al final del periodo formativo práctico una evaluación de naturaleza general, creando a tal fin una Comisión plural con importante representación de los sectores universitarios y profesionales afectados.



IV

Entrando ya en el análisis del articulado, cabe destacar que se regulan dos títulos acreditativos de aptitud profesional, el título profesional de Abogado y el título profesional de Procurador de los Tribunales. La Ley no interfiere, más allá de constituir estos títulos, en los presupuestos de ejercicio profesional de la Abogacía y la Procura.

Como establece el Capítulo II, la formación que nos ocupa podrá ser impartida por las Universidades, si bien no puede olvidarse que estamos ante un título profesional, de manera que, como ya se ha indicado, a efectos de admitir los correspondientes programas de estudios como suficientes para la capacitación profesional, y sin que ello interfiera en su validez académica, éstos cursos serán acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia. Ello otorga una gran flexibilidad al modelo y respeta al máximo la autonomía universitaria, pues permite que las Universidades decidan qué configuración tendrán estos estudios en cada caso, sin interferir en la posibilidad de que, además, las Universidades organicen otros estudios jurídicos de postgrado con la validez académica que les otorgue la normativa sectorial vigente.

Asimismo se reconoce la validez de la formación práctica impartida en las Escuelas de Práctica Jurídica de Abogados y demás centros que puedan ser homologados por las Corporaciones profesionales, dentro de los convenios antes referidos, como reconocimiento a la labor de preparación de los profesionales que, sobre todo para la mejor tutela en la justicia gratuita, vienen realizando estas Escuelas.

En cuanto a la evaluación final se refiere, si bien la misma, para garantizar la objetividad, será única en todo el territorio nacional, razones de operatividad aconsejan su descentralización, con la creación de una comisión evaluadora para el territorio de cada Comunidad Autónoma donde tengan su sede los Centros que impartan esta formación práctica.

En cuanto a las Disposiciones que complementan el texto, debe destacarse el establecimiento de un amplio periodo de “vacatio legis” para entrada en vigor de esta norma, durante el que no se exigirán ni el título profesional de Abogado ni el título profesional de Procurador de los Tribunales para colegiarse y ejercer las respectivas profesiones, de modo que no se quiebren las expectativas de los actuales estudiantes de la licenciatura o el grado en Derecho.

Asimismo, se ha resuelto la cuestión de aquellos que ejercen el Derecho desde otra función para cuyo desempeño han superado pruebas selectivas acreditativas de capacitación jurídica, respecto de los cuales carecería de sentido someterlos a un proceso formativo y a una evaluación reiterativa si deciden pasar a desempeñar la Abogacía o la Procura.



La competencia estatal está amparada en el artículo 149.1. 1ª, 6ª y 30ª de la Constitución, de acuerdo con el artículo 36 de la misma, por lo que las previsiones de esta Ley serán de aplicación en todo el territorio nacional.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto y finalidad de la ley.*

1. Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones de obtención del título profesional de Abogado y el título profesional de Procurador de los Tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con el fin de garantizar el acceso de los ciudadanos a un asesoramiento, defensa jurídica y representación técnica de calidad.

2. La obtención del título profesional de Abogado en la forma determinada por esta Ley es necesaria para el desempeño de la asistencia letrada en aquellos procesos judiciales y extrajudiciales en los que la normativa vigente imponga o faculte la intervención de Abogado, y, en todo caso, para prestar asistencia letrada o asesoramiento en Derecho utilizando la denominación de Abogado; todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la Abogacía.

3. La obtención del título profesional de Procurador de los Tribunales en la forma determinada por esta Ley es necesaria para desempeñar la representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice, así como para utilizar la denominación de Procurador de los Tribunales, sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la Procura

4 La obtención de los títulos profesionales de Abogado o Procurador será requisito imprescindible para la colegiación en los correspondientes Colegios profesionales.

Artículo 2. *Acreditación de aptitud profesional.*

1. Tendrán derecho a obtener el título profesional de Abogado o el título profesional de Procurador de los Tribunales las personas que se encuentren en posesión del título universitario de Licenciado en Derecho, o del Título de Grado que lo sustituya de acuerdo



con las previsiones contenidas en el artículo 88 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y su Normativa de desarrollo y que acrediten su capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación especializada y la evaluación regulada por esta Ley.

2. La formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtención de estos títulos es una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

3. Los títulos profesionales regulados en esta ley serán expedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.

CAPÍTULO II

Obtención de la capacitación profesional

Artículo 3. *Formación.*

1. Los cursos de formación para abogados y procuradores podrán ser organizados e impartidos por Universidades públicas o privadas, Escuelas de Práctica Jurídica y otros centros de formación práctica profesional para Graduados en Derecho.

2. Todos estos centros deberán establecer al efecto los convenios a los que se hace referencia en el presente capítulo.

Artículo 4. *Formación universitaria.*

1. Los cursos de formación para Abogados podrán ser organizados e impartidos por Universidades públicas o privadas, de acuerdo con la normativa reguladora de la enseñanza universitaria oficial de postgrado y, en su caso, dentro del régimen de precios públicos, y deberán ser acreditados, a propuesta de éstas, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2. Esta acreditación se otorgará sin perjuicio de las autorizaciones y aprobaciones exigidas por la normativa educativa a los efectos de la validez y titulación académica de los referidos cursos.

2. Constituirán requisitos indispensables para la acreditación de los referidos cursos que éstos comprendan la realización de un periodo de prácticas externas en los



términos del artículo 6, y que incluyan la realización de la evaluación regulada en el Capítulo III.

3. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir tales cursos para su acreditación periódica en lo referente a su contenido y duración, así como a la titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados. La duración de los cursos será de 60 créditos, más los créditos necesarios para la realización de las prácticas externas referidas en el artículo 6.

4. Lo previsto en este artículo será de aplicación a los cursos de formación para el acceso a la Procura de acuerdo con la específica regulación que al efecto se establezca en sede reglamentaria. La duración de los mismos será la mitad de la duración establecida para los cursos de capacitación de Abogados.

Artículo 5. Escuelas de práctica jurídica y otras enseñanzas concertadas.

1. Las Escuelas de Práctica Jurídica creadas por los Colegios de Abogados que hayan sido homologadas por el Consejo General de la Abogacía conforme a su normativa reguladora podrán organizar e impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7, siempre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia en la forma que reglamentariamente se determine.

2. También podrán impartir cursos que permitan acceder a la evaluación regulada en el artículo 7 otros centros de formación práctica profesional para Graduados en Derecho, distintos de las Universidades, siempre que los citados cursos sean acreditados conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia en la forma que reglamentariamente se determine

3. Para que se pueda proceder a la acreditación y reconocimiento de sus cursos a los efectos de la determinación de su programa, contenido, profesorado y demás circunstancias, las Escuelas de práctica jurídica y otros centros referidos en este artículo deberán haber celebrado un convenio con una Universidad, pública o privada, por el que se garantice el cumplimiento de las exigencias generales previstas en el artículo 4 para los cursos de formación. Asimismo, deberán prever la realización de un periodo de prácticas externas en la Abogacía o en la Procura, según estén orientados a la formación profesional de los Abogados o de los Procuradores, en los términos del artículo siguiente, y la realización de la evaluación regulada en el Capítulo III.



Artículo 6. *Prácticas externas.*

1. Las prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la Abogacía o en actividades propias de la Procura, con los requisitos que reglamentariamente se determinen, deberán constituir un tercio, como máximo, del contenido formativo de los cursos a que se refieren los artículos precedentes, quedando como parte integrante de los mismos. En ningún caso implicarán relación laboral o de servicios.

2. Las prácticas se realizarán bajo la tutela de un Abogado o Procurador, según se dirijan a la formación para el ejercicio de la Abogacía o de la Procura. Los tutores serán Abogados o Procuradores del correspondiente Colegio con un ejercicio profesional superior a cinco años. Los respectivos Estatutos Generales de la Abogacía y de la Procura reglamentarán los demás requisitos para el desempeño de la tutoría, así como los derechos y obligaciones del tutor, cuya infracción dará lugar a responsabilidad disciplinaria.

3. En los supuestos regulados en los artículos 4 y 5.2, deberá haberse celebrado un convenio entre la Universidad o Centro formativo y al menos un Colegio Profesional de Abogados o un Colegio Profesional de Procuradores, que establezca la fijación del programa de prácticas y la designación de los correspondientes tutores, el número máximo de alumnos que podrá asignarse a cada tutor, los lugares o instituciones donde se efectuarán las prácticas, así como los mecanismos de control del ejercicio de éstas, dentro de los requisitos fijados reglamentariamente.

CAPÍTULO III

Acreditación de la capacitación profesional

Artículo 7. *Evaluación.*

1. La evaluación de la aptitud profesional, que culmina el proceso de capacitación profesional, tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de Abogado o de la profesión de Procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales.

2. Las comisiones para la evaluación de la aptitud profesional serán convocadas conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia, oídas las Comunidades Autónomas, el Consejo de Coordinación Universitaria y el Consejo General de la Abogacía o el Consejo General de los Colegios de Procuradores.



3. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión evaluadora para el acceso a la Abogacía y de la comisión evaluadora para el acceso a la Procura, que serán únicas para los cursos realizados en el territorio de una misma Comunidad Autónoma, asegurando la participación en ellas de representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación y Ciencia, y de miembros designados a propuesta de la respectiva Comunidad Autónoma. En todo caso, en la comisión evaluadora para el acceso a la Abogacía habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española; asimismo, en la comisión evaluadora para el acceso a la Procura habrá miembros designados a propuesta del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales. El número de representantes designados a propuesta de cada Ministerio, de la Comunidad Autónoma, y de la correspondiente corporación profesional será el mismo.

4. Si el número de aspirantes así lo aconseja, podrá constituirse una única comisión evaluadora para los cursos realizados en el territorio de varias Comunidades autónomas, señalándolo así en la convocatoria.

5. Tanto la evaluación para el acceso a la Abogacía como la evaluación para el acceso a la Procura tendrán contenido único para todo el territorio español en cada convocatoria. Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el cual el Ministerio de Justicia fijará el contenido concreto de cada evaluación, con participación de las Universidades organizadoras de los cursos, del Consejo General de la Abogacía Española o del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales.

6. Las convocatorias tendrán una periodicidad mínima anual y no podrán establecer un número limitado de plazas.

7. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de convocatoria, lugares y forma de celebración de la evaluación, publicación y comunicación de los resultados y demás requisitos necesarios para su realización. Asimismo, se regularán los programas y sistema de evaluación, de modo diferenciado para la Abogacía y la Procura, de acuerdo con la diferente capacitación necesaria para el desempeño de una y otra profesión.

Disposición adicional primera. *Libertad de establecimiento.*

El ejercicio permanente en España de la profesión de Abogado o Procurador con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se regulará por su legislación específica.



Disposición adicional segunda. *Informe en Derecho.*

1. Lo previsto en esta Ley no constituye obstáculo para que los Licenciados o Graduados en Derecho sin título profesional de Abogado puedan informar jurídicamente en aquellos supuestos en que no esté legalmente reservado a Abogado.
2. Dichos Licenciados o Graduados podrán inscribirse como tales Licenciados o Graduados en Derecho en los Colegios de Abogados en los términos que deberán establecerse en el Estatuto General de la Abogacía.

Disposición adicional tercera. *Ejercicio profesional de los funcionarios públicos.*

1. La actuación del personal al servicio de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la obtención del título regulado en esta Ley.

2. Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en derecho estarán exceptuados de obtener el título de Abogado o el título de Procurador de los Tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta Ley. También estarán exceptuados quienes hayan ingresado en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal o en el Cuerpo de Secretarios Judiciales. Asimismo, estarán exceptuados quienes hayan ingresado en alguno de los Cuerpos Militares en su condición de licenciados en Derecho.

Disposición adicional cuarta. *Adaptación de las normas colegiales a lo previsto en esta ley.*

Los colegios profesionales de abogados y procuradores adaptarán su normativa a lo previsto por esta ley.

Disposición adicional quinta. *Accesibilidad.*

Al objeto de favorecer el acceso de las personas con discapacidad a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en el diseño y realización de los cursos y evaluaciones a que se refiere el artículo 2.2 de la presente Ley, se tendrán en cuenta criterios de accesibilidad.



Disposición adicional sexta. *Consejos autonómicos.*

Las referencias al Consejo General de la Abogacía o al Consejo General de la Procura, o a sus respectivos Estatutos, contenidas en el articulado de la Ley, se entenderán hechas, en su caso, a los respectivos Consejos autonómicos o a su normativa reguladora, de conformidad con lo que disponga la legislación aplicable.

Disposición adicional séptima. *Grado en Derecho y Licenciatura en Derecho.*

A los efectos de la presente Ley, la referencia al grado en Derecho se entenderá hecha a la Licenciatura en Derecho, cuando así corresponda.

Disposición transitoria única. *Profesionales colegiados a la entrada en vigor de la exigencia de título profesional.*

1. Los títulos profesionales regulados en esta norma no serán exigibles a quienes ya estuvieran incorporados a un Colegio de Abogados o Procuradores en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.

2. Los títulos profesionales regulados en esta Ley tampoco serán exigibles a quienes, sin estar incorporados a un Colegio de Abogados o Procuradores a su entrada en vigor, hubieran estado incorporados antes de su entrada en vigor como ejercientes durante un plazo continuado o discontinuo no inferior en su cómputo total a un año, siempre que concurren en ellos los demás requisitos de acceso y procedan a colegiarse antes de volver a ejercer como tales, y no hubieran causado baja por sanción disciplinaria.

Disposición final primera. *Título competencial.*

Las disposiciones contenidas en esta ley, dictadas al amparo del artículo 149.1. 1ª, 6ª y 30ª de la Constitución y de acuerdo con el artículo 36 de la misma, serán de aplicación en todo el territorio nacional.

Disposición final segunda. *Habilitación reglamentaria.*

Se faculta al Gobierno, al Ministro de Justicia, al Ministro de Educación y Ciencia y a los titulares de los Departamentos ministeriales competentes para dictar cuantas disposiciones reglamentarias fueran necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.



Disposición final tercera. *Entrada en vigor de esta ley.*

Esta Ley entrará en vigor a los seis años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ELÉVESE AL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid, 23 de diciembre de 2005.

EL MINISTRO DE JUSTICIA

Juan Fernando López Aguilar

**PROJECTE DE LLEI D'EXERCICI DE
PROFESSIONS TITULADES I DE
COL·LEGIS PROFESSIONALS**

Termini de presentació d'esmenes

Termini: 15 dies hàbils (del 28.06.2005 al 14.09.2005).

Finiment del termini: 15.09.2005; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 21.06.2005.

Projecte de llei d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals

Tram. 200-00027/07

Text presentat

Reg. 24564 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2005

A LA MESA DEL PARLAMENT

Ernest Maragall i Mira, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya, celebrada el dia 31 de maig de 2005, es va prendre, entre d'altres, l'acord que es reproduïx a continuació:

«A proposta del conseller de Justícia s'aprova l'Avantprojecte de llei d'exercici de professions titulades i de col·legis professionals i s'autoritza l'esmentat conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present certificat a Barcelona, l'11 de juny de dos mil cinc.

Ernest Maragall i Mira
Secretari del Govern

PROJECTE DE LLEI D'EXERCICI DE PROFESSIONS TITULADES I DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La regulació de l'exercici de les professions titulades és una preocupació actual i comuna dels països del nostre entorn, en la mesura que contribueixen aproximadament a un terç de l'ocupació laboral i constitueixen un dels principals motors de creixement econòmic i progrés del coneixement en les societats avançades. Aquesta Llei, que es dicta en exercici de la competència que atribueix a la Generalitat de Catalunya l'article 9.23 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, s'emmarca en aquesta tendència i les regula tot fent un tractament conjunt i sistemàtic del seu l'exercici i de les condicions per a la seva organització associativa, sigui de naturalesa privada o col·legial.

Enfront de la regulació preexistent que contemplava només el règim dels col·legis professionals, aquesta Llei ha considerat convenient ampliar l'horitzó regulatori a les professions titulades en general, caracteritzant com a tals aquelles que requereixen, per al seu exercici, la possessió d'un títol universitari. Partint de la vinculació d'aquestes professions a aquest requisit de titulació superior, aspecte que les dota d'una especial transcendència social, el text estableix uns principis bàsics relatius a les condicions d'accés a la professió, les incompatibilitats, i els drets i deures dels professionals, que garanteixen que quedin respectats els interessos generals i els dels destinataris de l'activitat professional. Aquesta normativa no és exhaustiva, perquè ha de conviure forçosament amb l'específica de cada sector professional, però serveix de punt de referència comú al qual han d'ajustar-se de manera precisa les normes pròpies de cada sector.

La Llei posa especial cura a respectar el dret comunitari europeu i hi adequa les seves previsions. En aquest sentit cal destacar, com a novetat important que la Llei introdueix a partir d'una tècnica d'incorporació mixta, material i per referència, dues aportacions: en primer lloc, es fa la distinció entre exercici permanent d'una professió titulada i exercici ocasional d'una activitat professional titulada, quedant aquest últim regulat per l'ordenament del país on s'exerceix habitualment la professió, només amb una vinculació circumstancial a la legislació catalana; i en segon lloc, s'assumeixen les condicions de reconeixement professional establerts a la legalitat comunitària, i es demana, a més, la concertació entre universitats i col·legis professionals per a la formació professional prèvia i de caràcter habilitant.

En aquest mateix context de regulació bàsica comuna de l'exercici de les professions titulades s'estableix també un règim sancionador general per raó de les infraccions vinculades a l'exercici professional, amb independència que es tracti de professions col·legiades o no col·legiades. El tractament que en fa la Llei intenta equilibrar el respecte als principis de legalitat, tipicitat i proporcionalitat que, conjuntament amb altres garanties procedimentals, han d'observar-se en el règim disciplinari, amb la flexibilitat necessària per a permetre'n un cert desenvolupament col·legial, si escau, que doni compte de les particularitats de cada professió.

Al marge d'aquest conjunt normatiu, la Llei regula el règim disciplinari col·legial, aplicable només als professionals col·legiats, que es fonamenta en l'incompliment dels seus deures per raó de la pertinença a la corporació respectiva. En aquest àmbit, la Llei és deferent amb l'autonomia organitzativa dels col·legis i es limita a establir criteris bàsics sobre graduació de les infraccions i els tipus de sancions sense que aquestes hagin de coincidir necessàriament amb les previstes per a les infraccions de caire professional, però sí guardar amb elles la deguda proporcionalitat.

Una altra novetat important de la Llei, que pretén introduir un element de flexibilitat en el sistema organitzatiu de les professions titulades, és la regulació de les associacions professionals. Aquestes entitats constitueixen una alternativa a l'organització col·legial en aquells casos en què no s'aprecien motius que justifi-

quin suficientment la integració obligatòria dels professionals en una corporació de dret públic. A aquestes associacions, de creació voluntària, es reconeixen, entre d'altres, les funcions de vetllar pel bon exercici de la respectiva professió i de col·laborar activament amb l'Administració en representació i defensa dels interessos dels professionals, fins i tot podent exercir funcions per delegació d'aquesta.

El règim jurídic dels col·legis professionals s'aborda des d'una perspectiva especialment rigorosa. Davant l'excessiva proliferació d'organitzacions col·legials produïda en els darrers anys sense l'exigència d'uns requisits mínims i homogenis, la nova llei estableix que només les professions que requereixen un títol oficial habilitant de caràcter universitari i, alhora, desenvolupen una funció d'especial rellevància social, poden quedar integrades en una organització col·legial. Els col·legis professionals, malgrat tenir una base associativa privada, es constitueixen com a corporacions de dret públic, i això obliga a establir uns condicionants legals clars per a la creació de nous col·legis, especialment quan el règim de col·legiació afecta de manera intensa els professionals concernits.

Cal tenir present que la decisió de crear un col·legi professional ha de venir motivada per la presència d'un interès social que justifiqui la integració d'un col·lectiu en aquella organització, en la mesura que aquesta decisió s'ha de considerar com una excepció a la llibertat d'associació constitucionalment reconeguda.

Per aquesta mateixa raó, també s'ha considerat oportú establir el principi d'adscripció obligatòria en els col·legis de nova creació, ja que l'opció per l'organització col·legial quedaria en bona part desvirtuada si, a la pràctica, funcionen més com a associacions que com a veritables col·legis professionals. La transparència i la coherència normativa sembla que han de convergir cap a una lògica que associï la creació d'un col·legi amb la integració necessària de tots els que exerceixin la professió corresponent.

Tanmateix, no es pot oblidar la base associativa que es troba en el substrat dels col·legis, la qual cosa fa que la seva condició de corporacions de dret públic s'hagi de conciliar amb aquella realitat. Això justifica l'establiment d'un règim jurídic flexible en el qual han de cohabitar les funcions públiques dels col·legis, pròpiament dites, amb l'exercici d'altres funcions privades, amb la corresponent diferenciació del règim jurídic aplicable. Al mateix temps, també cal reconèixer l'existència d'un espai d'autonomia col·legial que s'ha de concretar especialment en l'elaboració dels seus estatuts i les seves pròpies normes i en un disseny només general de l'organització interna i les regles de funcionament.

En definitiva, l'organització col·legial ha de ser l'expressió legal de la solució d'integrar les professions d'especial rellevància i transcendència social dins un sistema administratiu basat en la pròpia participació dels professionals i encarregat directament de la gestió dels interessos públics més estretament vinculats a l'exercici de la professió. Per això la Llei insisteix a donar especial rellevància a la funció social que han de complir els col·legis.

Cal destacar, també, la novetat que el text incorpora respecte al règim de creació dels col·legis professionals. El sistema vigent que remet a una llei singular i específica la creació de col·legis, té l'inconvenient de poder excepcionar per via de llei singular el disseny establert per la llei general, la qual cosa pot produir —com així ha succeït en algunes ocasions— una desnaturalització i diversificació no desitjables del model col·legial.

Per tal d'evitar aquest risc, la proposta normativa planteja una opció alternativa que combina la intervenció del Parlament i del Govern. En síntesi, aquesta solució s'articula en base als principis següents:

a) La determinació en la norma general reguladora dels col·legis professionals dels pressupòsits i requisits necessaris que han de concórrer per a la creació d'un col·legi.

b) L'atribució al Govern de la seva aplicació mitjançant decret, però amb la intervenció prèvia i favorable del Parlament per tal de verificar la concurrència dels requisits al cas concret (intervenció que habilita expressament l'article 137 del Reglament del Parlament).

Aquest nou model de decisió ofereix avantatges evidents respecte del marc vigent. En primer lloc, garanteix que la decisió s'adopti sempre dins el marc general previst a la Llei de col·legis professionals. En segon lloc, respecta la reserva de llei establerta en l'article 36 de la Constitució, ja que el text incorpora ara els paràmetres legals sota els quals es produeix aquesta creació. En tercer lloc, permet una intervenció decisòria del Parlament, que si bé no té naturalesa formal de llei, incorpora materialment els principis de transparència, publicitat i pluralisme propis d'un debat i decisió parlamentària especialment quan aquesta segueix les normes generals del procediment legislatiu. I en quart lloc, dota als interessats de major garanties de tutela judicial davant una decisió d'integració obligatòria a un col·legi, en la mesura que el decret és susceptible de recurs en via jurisdiccional ordinària.

D'altra banda, cal posar en relleu la major coherència d'aquest model amb la funció legislativa en tant que aquesta, per la seva mateixa naturalesa, ha d'actuar normalment en el pla de la regulació general i no en el format de llei-acte o llei-mesura, que és el que succeeix actualment.

Un tret remarcable de l'organització dels col·legis professionals catalans és la coexistència de diversos models d'articulació territorial. En algunes professions, hi ha un col·legi que abasta tot el territori de Catalunya i en d'altres, en canvi, n'hi ha diversos d'àmbit territorial més reduït, confegint així un sistema col·legial més fraccionat i plural. Aquesta Llei aposta preferentment, en relació amb els col·legis de nova creació, pel model de col·legi català únic i, respectant la situació actual, facultat l'Administració de la Generalitat per promoure la fusió voluntària dels col·legis territorials d'una mateixa professió. Tenint present, doncs, aquesta diversitat de models, la Llei regula l'agrupació dels col·legis territorials d'una mateixa professió en consells de col·legis i defineix les funcions i les regles bàsiques d'organització i funcionament d'aquests.

També presenta una complexitat notable la convivència entre l'organització col·legial i dels consells de col·legis de Catalunya amb els consells d'àmbit estatal. La continuïtat d'aquests, amb funcions que tenen projecció i incidència general, posa en relleu com encara no s'han assumit totes les conseqüències de la distribució de competències en matèria de col·legis. Per aquesta raó és important que la nova llei estableixi el principi que l'organització col·legial de Catalunya és autònoma respecte de les altres organitzacions d'àmbit estatal, sens perjudici de les relacions que es puguin establir per via de cooperació.

Un altre aspecte considerat per la llei són les relacions entre els col·legis i els consells de col·legis i l'Administració de la Generalitat. En aquest àmbit la llei es decanta pel principi d'autonomia col·legial pel que fa a les decisions en matèria de la seva competència pròpia, sense oblidar, però, la conveniència d'algunes intervencions de la Generalitat en temes d'especial transcendència com és el cas de la potestat normativa col·legial o el respecte a la legalitat dels actes i acords subjectes al dret administratiu, si bé es garanteix que aquestes intervencions es produeixin sempre evitant la utilització de criteris de mera oportunitat.

L'aplicació d'aquest model s'ha d'entendre sens perjudici del foment de canals cooperatius i participatius, que hi són especialment compatibles, així com de la previsió d'una funció registral de l'Administració de la Generalitat en relació amb els diversos elements regulats.

La llei estableix un règim de publicitat de les associacions professionals i les organitzacions col·legials que es fa efectiva per mitjà de sengles registres administratius públics, que compleixen també funcions reglades de verificació de legalitat. En el Registre d'associacions professionals, hi hauran de constar les associacions professionals a què es refereix el Títol IV de la llei, però, per evitar duplicitats innecessàries, es preveu que les funcions de verificació de legalitat, inscripció d'actes i publicitat material i formal es duguin a terme per mitjà del registre general d'associacions on es va inscriure (i on se seguirà inscrivint en el futur) la seva constitució i les seves vicissituds. En el Registre de col·legis professionals, que abasta els col·legis, els consells de col·legis i les delegacions catalanes de col·legis únics d'àmbit estatal, té per objecte la inscripció d'actes de naturalesa organitzativa i funcional rellevants per al tràfic jurídic, però també de totes les normes reglamentàries adoptades per cada entitat.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA LLEI

La present llei té per objecte regular l'exercici de les professions titulades dins l'àmbit territorial de Catalunya, així com les associacions professionals, els col·legis professionals i els consells de col·legis que desenvolupin la seva activitat en aquest mateix territori.

ARTICLE 2. CONCEPTE DE PROFESSIONI TITULADA

A efectes d'aquesta llei són professions titulades aquelles que es caracteritzen per l'aplicació de coneixements i tècniques per a l'exercici de les quals cal estar en possessió d'un títol acadèmic universitari, acreditatiu de la completa superació d'un pla d'estudis, que habiliti per a l'exercici professional d'acord amb la normativa vigent i, en el seu cas, complir altres condicions establertes per llei.

ARTICLE 3. RÈGIM D'EXERCICI

Les professions titulades poden ser col·legiades o no, sens perjudici del dret d'associació. Són col·legiades aquelles professions en les quals, d'acord amb la llei, els professionals que les exerceixen queden integrats en una organització col·legial.

TÍTOL II. EXERCICI DE LES PROFESSIONS TITULADES

ARTICLE 4. EXERCICI PROFESSIONAL

1. L'exercici professional es defineix als efectes d'aquesta llei com la prestació al públic, normalment remunerada, dels serveis propis d'una activitat o professió.
2. L'exercici professional titulat es regeix pel marc general establert per aquesta llei i per les normes particulars que regulen la professió que es tracti.
3. Les disposicions d'aquest Títol s'apliquen a l'exercici professional a títol permanent, sens perjudici de les disposicions que resultin aplicables a l'exercici ocasional de l'activitat.

ARTICLE 5. ACCÉS A L'EXERCICI

1. Per accedir a l'exercici d'una professió titulada cal estar en possessió del títol acadèmic corresponent i complir, si escau, les altres condicions habilitants legalment establertes.
2. Es respectaran, en tot cas, les condicions de reconeixement professional de títols i d'equivalència de condicions fixades a la legalitat comunitària.
3. L'accés a l'exercici professional pot quedar condicionat, si així ho estableix una llei i en els termes que aquesta disposi, a una formació pràctica prèvia o a l'obtenció d'una acreditació d'aptitud, amb la participació dels col·legis professionals i de les universitats.

ARTICLE 6. REQUISITS D'EXERCICI

1. Poden exercir una activitat professional titulada les persones que compleixin els requisits següents:
 - a) Estar en possessió del títol acadèmic i de les condicions que determina l'article 5 d'aquesta llei.
 - b) No trobar-se en situació d'inhabilitació professional.
 - c) No trobar-se en una de les causes d'incompatibilitat o de prohibició establertes a les lleis.
 - d) Complir, en el seu cas, les normes de col·legiació corresponents.

2. Els professionals titulats exerceixen la seva activitat amb llibertat i independència, servint l'interès del destinatari i de la societat, d'acord amb la capacitat i habilitat que determina la bona pràctica professional i complint les regles deontològiques corresponents.

3. El que estableix l'apartat anterior s'entén referit a l'àmbit estrictament professional independentment dels drets i deures propis de la relació jurídica en virtut de la qual s'exerceix la professió.

ARTICLE 7. INCOMPATIBILITATS

1. L'exercici de les professions titulades queda subjecte al règim d'incompatibilitats que en cada cas estableixi la llei.

2. En el cas de les professions titulades col·legiades, els consells dels col·legis professionals, o en el seu cas, els col·legis professionals, inclouran en la seva pròpia normativa les regles que siguin precises per a assegurar en l'àmbit de cada professió el compliment pels seus col·legiats de les disposicions legals aplicables en matèria d'incompatibilitats i especialment el deure d'abstenció en els casos de conflictes d'interessos amb els destinataris dels seus serveis.

3. A instància dels professionals col·legiats, els col·legis professionals poden declarar la inexistència de conflicte d'interessos en un supòsit concret, a l'exclusiu efecte de constatar que la persona afectada no té el deure d'abstenció.

4. Els col·legis professionals han de comunicar a l'Administració les actuacions irregulars de les quals tinguin coneixement que considerin contràries a la legislació vigent en matèria d'incompatibilitats dels professionals vinculats a aquella mitjançant relació administrativa, laboral o qualsevol relació de prestació de serveis.

ARTICLE 8. DRETS I DEURES

1. Els professionals titulats tenen el dret i el deure d'actuar segons les regles i tècniques pròpies del saber de la professió corresponent, prenent en consideració les experiències pròpies del sector. També tenen el dret i el deure de formació professional permanent.

2. Les universitats i els col·legis professionals col·laboraran en la formació continuada dels professionals col·legiats, i a tal efecte poden subscriure els corresponents acords.

3. En el marc de la seva actuació conjunta amb les universitats, els col·legis professionals han d'organitzar de forma permanent activitats formatives d'actualització professional dels col·legiats i expedir certificacions acreditatives de la realització d'aquestes activitats conjuntament amb les universitats que hi hagin participat.

ARTICLE 9. ASSEGURANÇA

1. Els professionals titulats tenen el deure de cobrir els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de la seva professió mitjançant una assegurança.

2. En el supòsit de professions col·legiades, els col·legis professionals han d'adoptar les mesures necessàries per

promoure i facilitar el compliment del deure d'assegurança dels seus col·legiats.

3. No serà necessari el compliment d'aquest requisit d'assegurança quan el professional actuï exclusivament com a personal al servei d'una administració pública.

4. Les previsions establertes en aquest article s'han de desenvolupar per reglament en funció de les característiques pròpies de les professions titulades i del seu caràcter col·legiat en el seu cas amb la participació en la seva elaboració dels col·legis i les associacions professionals corresponents.

ARTICLE 10. SECRET PROFESSIONAL

Els professionals titulats tenen el dret i el deure de secret professional, d'acord amb la Constitució i la legislació específica aplicable.

ARTICLE 11. INTRUSISME I ACTUACIONS PROFESSIONALS IRREGULARS

1. Els actes d'intrusisme i les actuacions professionals irregulars han de ser posades en coneixement de l'Administració de la Generalitat o, en el cas de professions col·legiades, del col·legi corresponent.

2. Als efectes d'aquesta Llei, es considera intrusisme la realització d'actuacions professionals sense complir els requisits legalment establerts per a l'exercici de la professió, i actuació professional irregular la que vulnera les regles deontològiques, es realitza sense la diligència professional deguda o incorre en competència deslleial.

ARTICLE 12. PRESTACIONS PROFESSIONALS OBLIGATÒRIES

1. En l'exercici de la funció social que comporta l'exercici de les professions titulades els professionals titulats han de realitzar aquelles prestacions que es determinin per llei. Per a aquestes actuacions, s'establirà un sistema de retribució o de compensació econòmica.

2. En supòsits de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública es pot imposar als professionals titulats el deure d'exercici professional, en els termes previstos legalment.

3. La imposició d'aquest deure afectarà a tots els professionals titulats de la professió de què es tracti dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, ja sigui en la totalitat del seu territori, ja sigui en un àmbit territorial inferior en funció de l'extensió i de la gravetat del supòsit pel qual es reclama. En qualsevol cas s'aplicarà el principi de proporcionalitat i el deure només serà exigible quan els mitjans a disposició de l'Administració no siguin suficients per cobrir els requeriments que demanda la situació de necessitat.

El compliment d'aquest deure ha de ser indemnitzat d'acord amb la normativa vigent.

4. Als efectes de l'aplicació del que preveuen els dos apartats anteriors, els col·legis professionals donaran l'auxili necessari a l'autoritat competent per coordinar les prestacions dels seus col·legiats.

ARTICLE 13. EXERCICI OCASIONAL D'UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL

1. L'exercici no permanent a Catalunya d'una activitat professional amb caràcter transnacional per part dels nacionals dels Estats membres de la Unió Europea, o qualsevol altre dels beneficiaris que estableixi la legalitat comunitària, queda sotmès a les exigències de col·legiació pròpies del país on s'exerceix regularment la professió.

2. En el supòsit previst a l'apartat anterior les exigències locals mínimes d'ordre col·legial o professional, i particularment les deontològiques, seran aplicables quan siguin estrictament necessàries en funció de la naturalesa dels serveis professionals a realitzar, aplicant sempre el principi de proporcionalitat tal com està previst en la legalitat comunitària.

TÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI DE L'EXERCICI DE LES PROFESSIONS TITULADES

ARTICLE 14. POTESTAT DISCIPLINÀRIA

1. Les actuacions professionals que no compleixin les previsions establertes en aquesta Llei i en les normes específiques que regulin l'exercici de la professió que es tracti poden ser sancionades en els termes establerts en aquest títol.

2. El règim disciplinari de les professions titulades no col·legiades es exercit per l'Administració de la Generalitat. També ho és en el cas de professionals que, tenint l'obligació d'estar col·legiats, no la compleixin i d'aquells professionals exceptuats d'aquesta obligació d'acord amb l'article 36.2 d'aquesta Llei.

3. Els col·legis professionals tenen competència per sancionar els col·legiats que infringeixin les disposicions col·legials i professionals. Els consells de col·legis tenen aquesta competència en els supòsits que així ho determini expressament aquesta Llei.

ARTICLE 15. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Les infraccions en què es pot incórrer en l'exercici de les professions titulades es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

ARTICLE 16. INFRACCIONS MOLT GREUS

Són infraccions molt greus:

- a) L'exercici d'una professió sense disposar del títol professional habilitant.
- b) L'incompliment dels deures professionals quan d'això en resulti un perjudici greu per a les persones destinatàries del servei del professional o per a tercers.
- c) La vulneració del secret professional.
- d) L'exercici d'una professió en un supòsit d'inhabilitació professional o per part de qui incorri en un supòsit d'incompatibilitat o de prohibició d'exercici.
- e) La comissió de delictes amb dol, en qualsevol grau de participació, i que es produeixin en ocasió de l'exercici de la professió.

f) L'exercici d'una professió col·legiada per part de qui no compleixi amb l'obligació de col·legiació.

ARTICLE 17. INFRACCIONS GREUS

Són infraccions greus:

- a) La vulneració de les normes essencials de l'exercici i deontologia professional.
- b) L'incompliment dels deures professionals quan d'això en resulti un perjudici per a les persones destinatàries del servei del professional
- c) L'incompliment de l'obligació que tenen les persones col·legiades de comunicar els supòsits d'intrusisme professional dels quals siguin coneixedores.
- d) L'incompliment del deure d'assegurança, quan sigui obligatòria.
- e) L'incompliment del deure de prestació obligatòria previst en aquesta Llei o en les normes que així ho disposin, llevat de l'acreditació de causa justificada que faci impossible la prestació del servei, després d'haver-ne estat degudament requerit.
- f) Els actes que tinguin la consideració de competència deslleial d'acord amb el que estableixin les lleis.
- g) Les actuacions professionals que vulnerin els principis constitucionals i internacionals d'igualtat i no discriminació.

ARTICLE 18. INFRACCIONS LLEUS

És infracció lleu la vulneració de qualsevol altra norma que reguli l'activitat professional, sempre que no constitueixi infracció greu o molt greu.

ARTICLE 19. POTESTAT NORMATIVA DELS COL·LEGIS

Les normes col·legials poden desenvolupar el règim disciplinari establert en aquest títol, sense introduir en cap cas nous supòsits d'infracció diferents dels previstos en els articles anteriors

ARTICLE 20. SANCIONS

1. Les infraccions molt greus poden ser objecte de les sancions següents:

- a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a cinc anys.
- b) Multa de quantitat no inferior a 5.000 euros i no superior a 50.000 euros.

2. Les infraccions greus poden ser objecte de les sancions següents:

- a) Inhabilitació professional durant un temps no superior a un any.
- b) Multa de quantitat no inferior a 1.000 euros i no superior a 5.000 euros.

3. Les infraccions lleus poden ser objecte de les sancions següents:

- a) Amonestació.
- b) Multa de quantitat no superior a 1.000 euros.

4. Com a sanció complementària també es pot imposar l'obligació de realitzar activitats de formació professional o deontològica quan la infracció s'hagi produït a causa de l'incompliment de deures que afectin l'exercici o la deontologia professional.

5. Si la persona que ha comès una infracció n'ha obtingut un guany econòmic, a la sanció prevista anteriorment podrà afegir-s'hi una quantia addicional fins a l'import del profit obtingut pel professional.

ARTICLE 21. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS

Les sancions es graduen en funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas, d'acord amb els principis generals establerts per a la potestat sancionadora en la legislació de règim jurídic i procediment administratiu.

ARTICLE 22. INHABILITACIÓ PROFESSIONAL

1. La sanció d'inhabilitació impedirà l'exercici professional durant el temps pel qual hagi estat imposada.

2. L'òrgan que resolgui comunicarà la seva decisió a les administracions competents, així com al consell de col·legis professionals que correspongui.

3. La inhabilitació serà efectiva a partir del moment en què la resolució que la imposi posi fi a la via administrativa. Quan en una mateixa persona concorrin diferents resolucions d'inhabilitació successives, el termini establert en cadascuna d'elles començarà a computar-se a partir del compliment definitiu de l'anterior.

ARTICLE 23. PRESCRIPCIÓ

1. Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus al cap d'un any, a comptar a partir del dia en què la infracció es va cometre.

2. La prescripció queda interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment sancionador. El termini de prescripció tornarà a iniciar-se si l'expedient sancionador ha estat aturat durant un mes per causa no imputable al presumpte infractor.

3. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys després d'haver estat imposades; les sancions per faltes greus prescriuran als dos anys, i les sancions per faltes lleus al cap d'un any.

4. Les sancions que donin lloc a una inhabilitació per un període igual o superior als tres anys prescriuran un cop transcorregut el mateix termini pel qual va ser imposada la sanció.

5. Els terminis de prescripció de les sancions començaran a comptar-se a partir del dia següent en què esdevingui ferma la resolució que les imposa.

6. La prescripció queda interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment d'execució. El termini de prescripció tornarà a iniciar-se si el procediment d'execució resta aturat durant més de sis mesos per causa no imputable a la persona infractora.

ARTICLE 24. PROCEDIMENT

1. El règim sancionador previst en aquesta Llei quedarà sotmès als principis de legalitat, irretroactivitat, tipicitat, proporcionalitat i no concurrència de sancions.

2. La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta Llei haurà d'haver-se dictat en el marc d'un expedient previ. En la tramitació d'aquest expedient hauran d'haver-se garantit, almenys, els principis de presumpció d'innocència, d'audiència de l'afectat, de motivació de la resolució final i de separació de l'òrgan instructor i decisor.

3. Les normes dels col·legis, en el cas de professions col·legiades, i les disposicions reglamentàries dictades en aplicació d'aquesta Llei desenvoluparan el procediment sancionador.

4. Seran aplicables al procediment sancionador previst en aquesta Llei les previsions sobre la potestat sancionadora establertes en la legislació sobre règim jurídic i de procediment administratiu.

ARTICLE 25. ÒRGANS COMPETENTS

La potestat disciplinària correspon:

a) Al departament de la Generalitat de Catalunya que correspongui en els casos previstos en l'article 14.2.

b) Als òrgans de govern dels col·legis professionals respecte dels professionals col·legiats.

c) Per excepció al previst en el paràgraf anterior, als consells de col·legis, si n'hi ha, quan la persona afectada tingui la condició de membre d'un òrgan de govern d'un col·legi professional o del propi consell.

ARTICLE 26. RÈGIM DE RECURSOS

1. Contra les resolucions dictades en matèria sancionadora per l'Administració de la Generalitat poden interposar-se els recursos previstos a la legislació de règim jurídic i procediment administratiu i, en el seu cas, recurs contenciós administratiu.

2. Contra les resolucions dictades pels col·legis professionals i els consells de col·legis poden interposar-se els recursos previstos al títol VII d'aquesta Llei i, en el seu cas, recurs contenciós administratiu.

ARTICLE 27. MESURES PROVISIONALS

Durant la tramitació de l'expedient sancionador es poden adoptar les mesures cautelars provisionals que siguin imprescindibles per assegurar l'eficàcia de la resolució final que pugui recaure. L'adopció d'aquestes mesures requereix acord motivat i l'audiència prèvia de l'interessat.

ARTICLE 28. EXECUTIVITAT

1. Les resolucions sancionadores només són executives quan posin fi a la via administrativa.

2. Els col·legis i consells de col·legis tenen competència per executar per sí mateixos les seves resolucions sancionadores, de conformitat amb el que estableixin les normes aplicables a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

TÍTOL IV. ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

ARTICLE 29. CONSTITUCIÓ I RÈGIM JURÍDIC

1. Les persones que exerceixen professions titulades no subjectes a col·legiació poden constituir, als efectes d'aquesta Llei, associacions professionals sense ànim de lucre amb la finalitat principal de vetllar pel bon exercici de la professió respecte dels destinataris dels serveis, i per a la representació i la defensa dels seus interessos i els generals de la professió. Als efectes d'aquesta Llei no tenen la consideració d'associacions professionals les associacions empresarials i els sindicats.

2. Les associacions professionals poden constituir i integrar-se en consells o federacions i, eventualment, confederacions.

3. Les associacions professionals i les seves federacions o confederacions es regeixen, en allò no previst per aquesta o altres lleis, per la legislació sobre associacions.

ARTICLE 30. FUNCIONS PRÒPIES

1. Les associacions professionals poden exercir, entre d'altres, les següents funcions:

a) Vetllar pel bon exercici de la professió i pel respecte dels drets de les persones destinatàries dels serveis professionals i, a aquest efecte, denunciar a l'Administració la comissió de les infraccions regulades en el Títol III d'aquesta Llei.

b) Representar les persones associades i exercir accions en defensa dels seus drets i interessos, els de l'associació i els generals vinculats a l'exercici de la professió.

c) Prestar serveis a les persones associades i, en especial, promoure la formació professional permanent.

d) Facilitar informació en matèria d'honoraris professionals, respectant-se sempre el règim de lliure competència.

e) Intervenir, per via de mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin produir entre persones associades o entre aquestes i tercers, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

f) Col·laborar amb els col·legis professionals d'àmbits afins i amb altres entitats representatives d'interessos ciutadans directament vinculades a l'exercici de la professió.

g) Participar en òrgans consultius de l'Administració; intervenir en procediments administratius d'acord amb la llei i, en particular, ser escoltades en l'elaboració de les disposicions de caràcter general que afectin directament l'exercici de la professió.

h) Emetre informes i dictàmens sobre matèries rellevants per a la professió, a petició de l'Administració o dels tribunals.

ARTICLE 31. FUNCIONS DELEGADES

Les associacions professionals poden exercir per delegació de l'Administració de la Generalitat funcions i activitats que no impliquin exercici d'autoritat. Per a aquesta delegació es tindrà en compte la implantació i

representativitat de les associacions existents en l'àmbit professional que es tracti i, en el seu cas, es portarà a terme mitjançant concurs si hi ha diverses associacions amb característiques idèntiques o semblants, o per conveni amb totes elles.

ARTICLE 32. BENEFICIS PÚBLICS I DRETS DE PARTICIPACIÓ

1. Les associacions professionals i les seves federacions o confederacions poden ser declarades d'utilitat pública, d'acord amb la legislació aplicable, i accedir a les mesures de suport econòmic, tècnic o d'altra índole que l'Administració estableixi per a les associacions d'interès social.

2. Per a gaudir dels beneficis públics i participar en organismes administratius, les associacions professionals i les seves federacions o confederacions han d'estar inscrites en el Registre d'associacions professionals i reunir les condicions que legalment o reglamentàriament s'estableixin en cada cas. En la determinació d'aquestes condicions s'han de tenir en compte, entre d'altres, criteris d'implantació territorial i de nombre de persones associades.

TÍTOL V. COL·LEGIS PROFESSIONALS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 33. NATURALES JA JURÍDICA

1. Els col·legis professionals són entitats de base associativa amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena d'obrar per al compliment dels seus fins.

2. Els col·legis professionals tenen la condició de corporacions de dret públic per al compliment de les funcions públiques que els atribueix la llei i com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici de la professió i de participació dels col·legiats en l'administració d'aquests interessos.

ARTICLE 34. FINALITATS

1. Els col·legis tenen com a finalitat essencial vetllar perquè l'actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional de què es tracti i especialment per garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També tenen com a finalitat, l'ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

2. En la seva condició de corporacions de dret públic els col·legis professionals estan subjectes al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a l'exercici de les funcions públiques que els atribueix la llei.

ARTICLE 35. REQUISITS DE CREACIÓ

1. Només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l'exercici de les quals es requereixi títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d'interès públic que ho justifiquin i a més una especial rellevància social o econòmica de les funcions inherents a la professió. S'entén que concorren motius d'interès

públic en les professions la titulació de les quals habilita específicament per a l'exercici d'actes o prestacions essencials en relació amb la salut, el patrimoni, els béns o serveis col·lectius o que afecten directament els drets fonamentals i les llibertats públiques.

2. La creació dels col·legis professionals s'ha de fer per decret del Govern. A aquests efectes, a més dels requisits establerts a l'apartat anterior, caldrà que:

- a) Existeixi un nombre de professionals en exercici lliure suficientment ampli que ho justifiqui
- b) No existeixi la possibilitat d'integració del col·lectiu sol·licitant en un col·legi professional existent.
- c) Ho demani un nombre suficientment representatiu dels professionals afectats.

Les previsions establerts en aquest apartat poden ser objecte de desenvolupament i concreció reglamentària.

3. Abans de la seva aprovació per decret, el Govern ha d'enviar al Parlament la proposta de creació del col·legi professional. La creació del col·legi professional pel Govern només es podrà dur a terme si el Parlament emet un pronunciament favorable al contingut de la proposta d'acord amb els requisits i condicions establerts en aquest article.

ARTICLE 36. RÈGIM DE COL·LEGIACIÓ

1. La incorporació al col·legi corresponent és requisit necessari per a l'exercici de les professions col·legiades.

2. El requisit de col·legiació no és necessari quan es tracti de personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa a l'exercici amb caràcter exclusiu de les funcions i activitats pròpies de la seva professió que realitzen per compte d'aquelles.

CAPÍTOL II. FUNCIONS DELS COL·LEGIS

ARTICLE 37. FUNCIONS PÚBLIQUES DELS COL·LEGIS

Són funcions públiques dels col·legis professionals:

- a) Garantir que l'exercici professional s'adeqüi a la seva normativa, deontologia i bones pràctiques, i es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l'actuació professional. A aquest efecte, els col·legis professionals han d'ordenar en l'àmbit de la seva competència l'exercici de les professions d'acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions de les persones col·legiades, per la dignitat professional i el respecte als drets dels ciutadans, així com proposar a l'Administració l'adopció de mesures en relació amb l'ordenació i la regulació de l'accés i l'exercici de la professió.
- b) Vetllar perquè no es produeixin actes d'intrusisme, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la professió col·legiada, adoptant en el seu cas les mesures i les accions previstes a l'ordenament jurídic.
- c) Exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats i col·legiades, en els termes establerts per la llei i les normes pròpies dels col·legis.

d) Visar els projectes i treballs de les persones col·legiades en els termes i amb els efectes que estableixi la normativa corresponent.

e) Participar en el procediment d'obtenció de l'acreditació d'aptitud per a l'exercici de la professió col·legiada, en cas que la llei estableixi aquest requisit.

f) Promoure i facilitar la formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir la seva competència professional.

g) Adoptar les mesures necessàries per facilitar l'exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa de la Unió Europea i les lleis.

h) Col·laborar amb l'Administració pública mitjançant la participació en òrgans administratius quan així es prevegi legalment i l'emissió d'informes que els siguin requerits per òrgans o autoritats administratives i judicials.

i) Informar els projectes de disposicions generals que afectin l'exercici de la professió.

j) Fomentar l'ús del català entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials on es desenvolupa la professió.

k) Emetre informe en els processos judicials i administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.

l) Facilitar informació en matèria d'honoraris professionals, respectant-se sempre el règim de lliure competència.

m) Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions dels col·legiats.

n) Les altres funcions de naturalesa pública que els atribueixi la legislació vigent.

ARTICLE 38. ALTRES FUNCIONS

Com a entitats de base associativa privada, els col·legis professionals exerceixen les activitats següents:

- a) Prestar serveis comuns a les persones col·legiades
- b) Gestionar el cobrament de les remuneracions i dels honoraris professionals a petició de les persones col·legiades, d'acord amb el que estableixin els estatuts del col·legi.
- c) Intervenir, per via de mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i tercers, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.
- d) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici de la professió col·legiada.

ARTICLE 39. RÈGIM DE LES FUNCIONS PÚBLIQUES

1. Les funcions dels col·legis professionals que els atribueix l'article 37 d'aquesta Llei tenen la condició de pròpies. Aquestes funcions s'exerceixen en règim d'autonomia sens perjudici dels controls per motius de legalitat previstos específicament en aquesta Llei o en altres normes amb rang de llei.

2. Els col·legis professionals també poden exercir funcions pròpies de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals de Catalunya per via de delegació.

3. La delegació de funcions requerirà la formalització d'un conveni, en el qual s'haurà de determinar l'abast i les condicions de la delegació, així com els mitjans i recursos necessaris per a l'exercici de les funcions. Els convenis de delegació han de ser publicats en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

ARTICLE 40. POTESTAT NORMATIVA DELS COL·LEGIS

1. Amb independència del seu àmbit de regulació estatutària, els col·legis professionals tenen capacitat normativa en relació amb les funcions públiques que els atribueix aquesta Llei.

2. La potestat reglamentària dels col·legis s'haurà d'ajustar, en tot cas, a les previsions establertes per les lleis i les disposicions de caràcter general. El procediment d'elaboració de les normes reglamentàries s'ajustarà al que disposen els estatuts i inclourà, en qualsevol cas, un període d'informació pública col·legial per un termini no inferior a un mes a fi que els col·legiats puguin conèixer la memòria justificativa del projecte, els informes i consultes i el contingut del mateix projecte, així com formular les alegacions, suggeriments o esmenes que considerin convenients, a les quals s'haurà de donar resposta abans de l'elevació del projecte a l'òrgan competent per a la seva aprovació.

3. Serà d'aplicació a les normes reglamentàries dels col·legis el que estableixen els apartats 3 i 4 de l'article 44.

CAPÍTOL III. ÀMBIT TERRITORIAL I REGLES D'INCORPORACIÓ ALS COL·LEGIS

ARTICLE 41. ÀMBIT TERRITORIAL DELS COL·LEGIS

1. Els col·legis professionals tenen l'àmbit territorial que determina la seva disposició de creació.

2. Els col·legis de nova creació tindran normalment com a àmbit territorial el de Catalunya. Tanmateix, amb caràcter excepcional, la disposició de creació pot establir un àmbit territorial diferent.

3. En cap cas no es pot constituir més d'un col·legi professional d'identica professió dins d'un mateix àmbit territorial.

ARTICLE 42. INCORPORACIÓ ALS COL·LEGIS PROFESSIONALS

1. Tothom que tingui la titulació acadèmica exigida i reuneixi els altres requisits que estableixin les lleis té dret a ser admès en el col·legi professional corresponent.

2. Les persones col·legiades poden ser exercents o no exercents. Totes les persones col·legiades són membres de ple dret del col·legi, sens perjudici dels drets i les obligacions específiques que derivin del règim de col·legiació.

3. Els estatuts poden preveure altres modalitats d'incorporació en els col·legis i de participació en les seves activitats, i han de regular, en aquest cas, els drets i deures de les persones que s'hi acullin.

4. La incorporació al col·legi on el professional té el seu domicili únic o principal habilita per a l'exercici de la professió a tot el territori de l'Estat, llevat del cas que una llei disposi altrament en atenció a l'exigència del deure de residència per a la prestació dels serveis professionals. Els professionals col·legiats només poden quedar subjectes al deure de comunicació al col·legi del lloc on hagin de prestar els seus serveis quan així s'estableixi legalment.

5. La incorporació al col·legi professional no és necessària quan es tracti de professionals de la Unió Europea establerts amb caràcter permanent i col·legiats en qualsevol país de la Unió, que vulguin exercir la professió amb caràcter ocasional a Catalunya. En aquest cas, s'apliquen les normes comunitàries corresponents.

6. La baixa en el col·legi professional es pot produir per incompliment reiterat del pagament de les quotes col·legials en els termes establerts en els estatuts, per pèrdua dels requisits exigits per a la col·legiació, per expulsió de conformitat amb el que disposa l'article 46 d'aquesta Llei, o a petició de la persona col·legiada. En cas de baixa per impagament, l'abonament de les quotes col·legials pendents, amb l'interès legal meritat, comportarà la rehabilitació automàtica de l'alta col·legial.

CAPÍTOL IV. REGLES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ARTICLE 43. AUTONOMIA ESTATUTÀRIA I DEMOCRÀCIA INTERNA

1. Els col·legis professionals elaboren i aproven autònomament els seus estatuts d'organització i funcionament.

2. L'organització interna i el funcionament dels col·legis han de ser democràtics. A aquest efecte, els col·legis han de disposar d'unes regles d'organització i de funcionament interns que permetin la participació dels col·legiats en la gestió i el control dels òrgans de govern i han de reconèixer als col·legiats els drets i les facultats necessàries per garantir-la. Són nuls de ple dret les disposicions estatutàries o de règim intern i els acords o actes adoptats pels òrgans dels col·legis que contravenen aquest principi.

ARTICLE 44. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

1. Els promotors o les persones que la disposició de creació d'un col·legi professional designi a aquest efecte han d'acordar el procediment de convocatòria i constitució de l'assemblea que haurà d'aprovar els estatuts del col·legi.

2. L'aprovació i modificació dels estatuts ha d'acordar-se en Junta o Assemblea General extraordinària, especialment convocada a aquest efecte. Se n'exceptua l'acord de canvi de domicili dintre de la mateixa localitat, que es pot aprovar en Junta o Assemblea ordinària.

3. Els estatuts aprovats i les seves modificacions s'han de trametre al departament de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de col·legis professionals, per a que en qualifiqui l'adequació a la legalitat, en disposi la inscripció en el Registre de col·legis professionals i n'ordini la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. Si no és produeix resolució expressa, els estatuts i les seves modificacions, s'entenen aprovats per silenci positiu transcorreguts el termini de sis mesos.

4. Els estatuts dels col·legis i les seves modificacions entren en vigor a partir de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*, llevat que prevegin una data d'entrada en vigor posterior

ARTICLE 45. CONTINGUT DELS ESTATUTS

Els estatuts del col·legi han de regular:

- a) La denominació, que ha d'incloure l'expressió «Col·legi», la professió corresponent i l'àmbit territorial.
- b) El domicili.
- c) Les seves finalitats, funcions i activitats.
- d) Els requisits que s'han de complir per adquirir la condició de col·legiat, fent constar el títol o títols corresponents i les causes de suspensió i pèrdua d'aquesta condició.
- e) La denominació, el règim de convocatòria i de constitució, el funcionament i la composició de l'òrgan de govern, com també la manera de designar, destituir i renovar els seus membres, i la durada del mandat d'aquests.
- f) La denominació, el règim de convocatòria i de constitució, el funcionament i la composició de l'òrgan plenari.
- g) El règim de deliberació i de presa d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de les actes.
- h) Els drets i les obligacions de les persones col·legiades.
- i) El règim disciplinari per raó de l'exercici professional i de l'incompliment de deures col·legials, en el marc dels articles 19 i 24 i l'article 46 d'aquesta Llei, respectivament.
- j) Els recursos dels col·legiats davant les resolucions del col·legi.
- k) El procediment i els requisits per a la modificació dels estatuts, la fusió i la segregació.
- l) El règim econòmic.
- m) Les causes i el procediment de dissolució i el règim de liquidació.

ARTICLE 46. RÈGIM DISCIPLINARI COL·LEGIAL

1. Sens perjudici del règim disciplinari regulat en el Títol III d'aquesta Llei, el col·legi pot adoptar també mesures disciplinàries contra les persones col·legiades fonamentades en l'incompliment dels seus deures col·legials.

2. Els estatuts han de tipificar les infraccions i les sancions i regular el procediment disciplinari, amb subjecció a allò que disposa l'article 24 d'aquesta Llei.

3. Les infraccions hauran de graduar-se en molt greus, greus i lleus. Només podran constituir infracció col·legial:

- a) L'incompliment d'obligacions establertes per les lleis, pels estatuts o per altres normes col·legials
 - b) L'incompliment d'acords o decisions adoptats per òrgans del col·legi sobre matèries que s'especifiquin estatutàriament.
 - c) La realització d'actes que impedeixin o alterin el funcionament normal del col·legi o dels seus òrgans.
 - d) L'ofensa o desconsideració envers altres professionals col·legiats de la mateixa professió o envers els membres dels òrgans de govern del col·legi o consell respectiu.
4. Les sancions podran consistir en l'amonestació, multa o expulsió, i es regularan d'acord amb els següents criteris:

- a) Les sancions de multa no podran excedir del que es disposa a l'article 20 pel que fa a la quantia.
- b) La sanció d'expulsió només es podrà imposar per reiteració en la comissió d'infraccions molt greus de les previstes a les lletres a) i b) de l'apartat anterior i haurà de contemplar-se en tot cas el dret del sancionat a sol·licitar la rehabilitació en el termini de tres anys a comptar de l'efectivitat de la sanció. La sanció d'expulsió només serà executiva quan la resolució que l'imposi posi fi a la via administrativa.

ARTICLE 47. ÒRGAN PLENARI

1. La Junta o Assemblea General és l'òrgan sobirà del col·legi. Pot deliberar sobre qualsevol assumpte d'interès per al col·legi, adopta acords en l'àmbit de la seva competència i controla l'activitat de l'òrgan de govern.

2. La Junta o Assemblea General, com a òrgan plenari, és integrada per totes les persones col·legiades de ple dret, exercents i no exercents.

3. Corresponen a la Junta o Assemblea General les següents funcions:

- a) Aprovar i modificar els estatuts.
- b) Elegir els membres de l'òrgan de govern de la manera que estableix l'article 49, i separar-los.
- c) Aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern, el pressupost, els comptes anuals i les quotes col·legials.
- d) Acordar la fusió, segregació o dissolució del col·legi.
- e) Aprovar i modificar el reglament de règim interior.
- f) Resoldre sobre qualsevol qüestió que li atribueixin les lleis, els reglaments o els estatuts o que no estigui reservada a l'òrgan de govern.

4. Totes les persones col·legiades no suspeses en l'exercici dels seus drets tenen dret de vot en l'òrgan plenari. Els estatuts han de regular les modalitats d'exercici d'aquest dret i poden establir regles de ponderació del vot de les persones col·legiades exercents i no exercents.

5. L'òrgan plenari ha de reunir-se almenys una vegada a l'any en caràcter ordinari. També es pot reunir amb caràcter extraordinari a iniciativa de l'òrgan de govern, o a petició del nombre de persones col·legiades que estatutàriament s'estableixi. En qualsevol cas, l'òrgan plenari ha de ser convocat quan ho demanin un nombre de persones col·legiades exercents superior al cinc per cent, o en el supòsit de l'apartat 7è quan ho demanin un nombre de delegats i delegades o representants superior al vint per cent.

6. Els estatuts han d'establir mitjans que facilitin la participació de les persones col·legiades en la deliberació i presa d'acords en l'òrgan plenari. En particular, si escau per raó de l'elevat nombre de persones col·legiades, han de regular la possibilitat de recórrer a procediments telemàtics per a l'exercici del dret de vot en els procediments electorals, i establir-ne els requisits i garanties d'ús.

7. En col·legis amb més de dos mil persones col·legiades, l'òrgan plenari pot estar integrat per delegats i delegades o representants, en un nombre no inferior a dos-cents, escollits per mitjà de sufragi universal, lliure, directe i secret de totes les persones col·legiades amb dret de vot. L'elecció ha de tenir lloc d'acord amb el procediment previst en els estatuts, que haurà de garantir la representació en l'òrgan plenari de totes les demarcacions territorials que composin el col·legi. El mandat dels delegats i delegades o representants no podrà ultrapassar els quatre anys.

ARTICLE 48. ÒRGAN DE GOVERN

1. L'òrgan de govern, que es pot identificar amb la denominació de «Junta de govern», «Junta directiva» o una altra de similar, administra i representa el col·legi, executa els acords de l'òrgan plenari i exerceix la potestat disciplinària i les altres funcions que li atribueixin els estatuts, seguint les directrius de l'òrgan plenari.

2. Les facultats de l'òrgan de govern s'estenen amb caràcter general a tots els actes propis de les finalitats del col·legi, sens perjudici que els estatuts en puguin determinar d'altres per als quals es requereixi l'autorització expressa de l'òrgan plenari.

3. L'òrgan de govern pot delegar l'exercici les seves funcions públiques d'acord amb les normes de procediment administratiu. Per a les de naturalesa privada, pot delegar en un dels seus membres o en més d'un, o nomenar apoderats generals o especials. No són delegables els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l'òrgan plenari.

Els estatuts han de preveure i regular les causes i procediments de suspensió o remoció dels membres dels òrgans de govern per incompliment de les seves obligacions, sens perjudici de l'exercici d'accions de responsabilitat.

ARTICLE 49. COMPOSICIÓ I CÀRRECS EN L'ÒRGAN DE GOVERN

1. L'òrgan de govern té caràcter col·legiat. Els seus membres han de ser escollits, en reunió de l'assemblea o seguint el sistema electoral que alternativament regulin els estatuts, mitjançant sufragi universal, lliure, di-

recte i secret de totes les persones col·legiades. El mandat dels membres de l'òrgan de govern no pot excedir de quatre anys, i l'exercici d'un mateix càrrec en aquest òrgan queda limitat, comptant les reeleccions que es puguin produir, a un màxim de dotze anys consecutius.

2. Els estatuts han de preveure mesures que facilitin la participació proporcionada

de dones i homes en la composició dels òrgans de govern.

3. L'òrgan de govern ha d'estar compost, com a mínim, per tres persones, amb els càrrecs de president, que pot tenir també la denominació de «Degà», «Síndic» o una de similar, de secretari i de tresorer.

4. Correspon a la persona titular de la presidència exercir les funcions de representació ordinària del col·legi i les altres que els estatuts, la llei i els reglaments li atorguin.

5. Correspon a la persona titular de la secretaria exercir les funcions de fedatari dels actes i acords del col·legi.

CAPÍTOL V. MODIFICACIONS DE L'ESTRUCTURA DELS COL·LEGIS I DISSOLUCIÓ

ARTICLE 50. MODIFICACIONS D'ÀMBIT TERRITORIAL PER VIA DE FUSIÓ

1. La fusió de dos o més col·legis professionals de la mateixa professió i diferent àmbit territorial es pot dur a terme per mitjà de l'extinció dels col·legis que hi participen i la constitució d'un nou col·legi, amb transmissió a aquest del seu patrimoni, o bé per mitjà de l'absorció d'un o de diversos col·legis per un altre, que haurà de modificar la seva denominació i àmbit territorial.

2. L'acord de fusió ha de ser adoptat en Junta o Assemblea General extraordinària de les persones col·legiades que pretenguin fusionar-se, adoptat per majoria simple dels col·legiats assistents i ha de ser aprovat per mitjà de decret del Govern, previ informe del consell de col·legis corresponent.

ARTICLE 51. MODIFICACIONS D'ÀMBIT TERRITORIAL PER VIA D'ESCISSIÓ

1. L'escissió territorial de col·legis té caràcter excepcional i només es permet per raons, degudament justificades, de millor compliment de les funcions públiques que tenen encomanades.

2. L'acord d'escissió ha de ser adoptat en Junta o Assemblea General extraordinària del col·legi afectat, tant si es produeix per divisió com per segregació, i requereix el vot favorable de la majoria absoluta de les persones col·legiades de ple dret, llevat que els estatuts estableixin una majoria més qualificada. L'acord ha de ser aprovat, previ informe del consell de col·legis corresponent, per mitjà de decret del Govern, que en valorarà l'oportunitat i conveniència atenent l'impacte en l'organització col·legial corresponent.

3. En cas de segregació, cal una petició prèvia, adreçada a l'òrgan de govern del col·legi, de la meitat més un

dels professionals col·legiats residents en l'àmbit territorial del col·legi projectat.

ARTICLE 52. FUSIÓ O SEGREGACIÓ

1. La fusió de col·legis de diferents professions i la segregació d'un col·legi, si comporta la creació d'un de nou per a l'exercici d'una professió que requereixi una titulació diferent a la del col·legi d'origen, s'han d'aprovar per un Decret del Govern, amb els requisits i efectes regulats en l'article 35 d'aquesta Llei, previ informe del consell o consells de col·legis corresponents.

2. L'acord de fusió o de segregació ha de ser adoptat per Junta o Assemblea General extraordinària dels col·legis que pretenguin fusionar-se o del col·legi afectat per la segregació, amb la forma i els requisits que estableixin els estatuts.

ARTICLE 53. CAUSES DE DISSOLUCIÓ

Els col·legis professionals es poden dissoldre per les causes següents:

- a) Pèrdua dels requisits legals necessaris perquè la professió tingui caràcter col·legiat.
- b) Acord de la Junta o Assemblea General, adoptat en la forma i amb els requisits establerts en els estatuts.
- c) Baixa de les persones col·legiades, si queden reduïts a un nombre inferior al de persones necessàries, d'acord amb els estatuts, per proveir tots els càrrecs de l'òrgan de govern.
- d) Fusió mitjançant la constitució d'un nou col·legi o absorció per un altre col·legi.
- e) Escissió mitjançant divisió.
- f) Altres establertes en els estatuts.

ARTICLE 54. PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ

1. La iniciativa per a la dissolució pot procedir del mateix col·legi professional afectat o del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de col·legis professionals.

2. Si la iniciativa prové del col·legi, aquest ha de formular la petició de dissolució a la persona titular del departament competent en matèria de col·legis professionals, acompanyant-la del certificat de l'acord adoptat per la Junta o Assemblea General a aquest efecte i de l'informe del consell de col·legis corresponent.

3. Si la iniciativa prové del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de col·legis professionals, pel fet de concórrer alguna de les causes legals de dissolució, aquest ha de donar audiència al col·legi afectat i requerir l'informe del consell de col·legis corresponent.

4. La dissolució d'un col·legi professional requereix un decret del Govern, el qual ha d'establir el procediment per a la liquidació del patrimoni, el nomenament de les persones o de la comissió encarregats de dur-la a terme i la destinació del romanent, d'acord amb els estatuts del col·legi dissolt i la llei.

TÍTOL VI. CONSELLS DE COL·LEGIS

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 55. CREACIÓ DELS CONSELLS DE COL·LEGIS

1. Quan l'organització col·legial d'una professió titulada està formada per diferents col·legis territorials, aquests s'han d'integrar necessàriament en un consell català de la professió, mitjançant l'agrupació dels corresponents col·legis.

2. Els consells de col·legis són creats per decret del Govern.

3. La creació del consell no és necessària quan la professió titulada només tingui un únic col·legi professional d'àmbit català. En aquest cas, el col·legi també exercirà les funcions atribuïdes als consells.

ARTICLE 56. NATURALESA I PERSONALITAT JURÍDIQUES

1. Els consells de col·legis són entitats amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins. La personalitat jurídica dels consells de col·legis s'adquireix des de l'entrada en vigor del decret de creació i la capacitat d'obrar des de la constitució dels seus òrgans, que ha de ser publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

2. Els consells de col·legis tenen la condició de corporacions de dret públic per al compliment de les funcions públiques que els atribueix la llei.

ARTICLE 57. FINALITAT

Els consells de col·legis tenen com a finalitat la representació i la defensa generals de la professió, d'acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional corresponent.

CAPÍTOL II. FUNCIONS

ARTICLE 58. FUNCIONS DELS CONSELLS

1. Els consells de col·legis tenen les funcions públiques següents:

- a) La representació i la defensa generals de la professió en l'àmbit de Catalunya i la coordinació dels col·legis que els integren.
- b) L'elaboració de normes relatives a l'exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.
- c) Emetre informe sobre els projectes normatius que els trameti el Govern o un departament de la Generalitat.
- d) Mediar o resoldre per via arbitral, si escau, els conflictes que puguin sorgir entre els col·legis i exercir les funcions disciplinàries en relació amb els membres dels òrgans de govern dels col·legis.
- e) Aprovar el seu pressupost i fixar equitativament la participació dels col·legis en les despeses del consell.
- f) Vetllar perquè l'actuació dels col·legis s'ajusti a les normes que regulen l'exercici de la professió i perquè l'actuació col·legial s'ajusti al principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de manera que no es produeixi cap tipus de discriminació.

g) Les altres que els atribueix la llei.

2. També és funció dels consells de col·legis elaborar un codi deontològic i de bones pràctiques, pel bon exercici de la professió i mantenir-lo actualitzat. Aquesta funció s'ha d'exercir respectant les disposicions generals establertes en aquests àmbits.

3. Els consells de col·legis també poden exercir altres funcions públiques per delegació del Govern de la Generalitat.

4. Els consells de col·legis poden exercir altres activitats de naturalesa privada, especialment en relació amb el foment, la creació i l'organització de serveis i prestacions en interès dels col·legis i dels professionals col·legiats.

ARTICLE 59. POTESTAT NORMATIVA DELS CONSELLS

Els consells de col·legis tenen capacitat normativa en relació amb les funcions que els atribueixen les lletres c), h) de l'apartat 1 i l'apartat 2 de l'article 58 d'aquesta Llei. L'exercici d'aquesta potestat s'haurà d'ajustar, en tot cas, al que preveuen els articles 40.2 i 44.3 i 4 d'aquesta Llei..

CAPÍTOL III. REGLES D'ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT

ARTICLE 60. AUTONOMIA ESTATUTÀRIA I CONTINGUT DELS ESTATUTS

1. Els consells de col·legis elaboren i aproven autònomament els seus estatuts.

2. Els estatuts dels consells han de regular:

a). La denominació, que ha d'incloure l'expressió «Consell de Col·legis», la professió corresponent i la menció de Catalunya com a àmbit territorial.

b). El domicili.

c). Les seves finalitats, funcions i activitats.

d). La denominació, el règim de convocatòria i de constitució, el funcionament i la composició del seu òrgan plenari, com també la manera de designar, destituir i renovar els seus membres, i la durada del mandat d'aquests.

e). El règim de deliberació i de presa d'acords del seu òrgan plenari i el procediment d'aprovació de les actes.

f). El procediment i els requisits de modificació dels estatuts.

g). El règim econòmic.

h). Els altres aspectes necessaris per a l'exercici de les seves funcions en relació amb els col·legis.

ARTICLE 61. ORGANITZACIÓ

1. Els consells de col·legis han de disposar d'un òrgan plenari, en el qual estiguin representats tots els col·legis que l'integren. Si així ho estableixen els estatuts, l'òrgan plenari pot delegar funcions d'execució dels seus acords i despatx d'afers de tràmit en una comissió permanent o en alguns dels seus membres.

2. L'òrgan plenari ha de tenir com a mínim un president o presidenta, amb la denominació que eventualment s'estableixi, un secretari o secretària i un tresorer o tresorera. Llevat que els estatuts disposin altrament, la presidència del consell serà assumida de forma rotatòria per representants de cadascun dels col·legis integrats en el consell, seguint l'ordre i la periodicitat acordats pel mateix consell o, en defecte d'acord, per ordre de major a menor nombre de persones col·legiades i per un període de dos anys.

3. Correspon a la persona titular de la presidència la representació ordinària del consell i les altres funcions que els estatuts, la llei i els reglaments li atorguin.

ARTICLE 62. ADOPCIÓ D'ACORDS

1. Els acords de l'òrgan plenari del consell s'adopten per majoria simple de vots dels membres presents o representats, seguint el règim de ponderació del vot establert en l'apartat següent.

2. Correspon a cada col·legi integrat en el consell un nombre de vots igual o proporcional al nombre de les persones col·legiades. Tanmateix, per a l'adopció d'acords caldrà també el vot favorable de més d'una quarta part de la representació dels col·legis presents.

3. El còmput del nombre de persones col·legiades a efectes de la ponderació regulada en l'apartat anterior s'ha de fer a 31 de desembre de cada any, sens perjudici d'altres requisits que puguin exigir els estatuts.

4. A efectes de l'exercici del dret de vot, els membres del consell designats per elecció d'un col·legi o per raó de la seva pertinença a aquest han d'actuar amb una sola representació.

5. Els estatuts poden establir, per a qüestions determinades, règims de majoria qualificada o de vot personal no ponderat.

CAPÍTOL IV. CAUSES DE DISSOLUCIÓ

ARTICLE 63. DISSOLUCIÓ

1. Els consells de col·legis es poden dissoldre per raó de la dissolució de tots els col·legis que l'integren, la reducció d'aquests a un de sol o la seva fusió en un sol col·legi d'àmbit català.

2. L'extinció dels consells de col·legis té lloc per mitjà de decret del Govern.

TÍTOL VII. DISPOSICIONS COMUNES ALS COL·LEGIS PROFESSIONALS I ALS CONSELLS DE COL·LEGIS

ARTICLE 64. RÈGIM JURÍDIC

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis, en la seva condició de corporacions de dret públic i en l'àmbit de les seves funcions públiques, actuen d'acord amb el dret administratiu i exerceixen les potestats inherents a l'Administració pública.

2. En l'exercici de les seves funcions públiques els col·legis i els consells de col·legis han d'aplicar en les seves relacions amb les persones col·legiades i els ciu-

adans i ciutadanes els drets i les garanties procedimentals que estableix la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu.

3. En l'exercici de les seves funcions privades, resten sotmesos al dret privat. També queden inclosos en aquest àmbit els aspectes relatius al patrimoni i a la contractació, així com les relacions amb el seu personal que es regeixen per la legislació laboral.

ARTICLE 65. RECURSOS CONTRA ACTES I ACORDS

1. Els actes i acords dels col·legis professionals i dels consells de col·legis subjectes al dret administratiu posen fi a la via administrativa i són recurribles directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa per part dels interessats i de l'Administració de la Generalitat. No obstant això, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que els ha dictat.

2. Els acords i actes dels col·legis professionals i dels consells de col·legis dictats en exercici de funcions delegades són recurribles davant l'administració delegant. La resolució d'aquest recurs posa fi a la via administrativa.

ARTICLE 66. RÈGIM ECONÒMIC

1. Els col·legis professionals i els consells de col·legis elaboren i aproven els seus pressupostos.

2. Els col·legis professionals i consells de col·legis poden percebre taxes o altres contraprestacions per la prestació dels serveis que corresponen a les seves funcions públiques en els termes que determini la llei.

3. Els estatuts dels col·legis professionals i dels consells de col·legis han d'establir un règim d'auditoria per al control de la gestió financera i pressupostària.

4. El règim que determina l'apartat anterior s'entén sens perjudici de la funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes de Catalunya pel que fa a l'aplicació dels recursos pressupostaris que, en el seu cas, hagin estat transferits per l'Administració de la Generalitat o local.

ARTICLE 67. RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

1. Les relacions entre els col·legis professionals i els consells de col·legis amb l'Administració de la Generalitat es regeixen pels principis de coordinació i cooperació.

2. La intervenció de l'Administració de la Generalitat sobre l'actuació i el funcionament dels col·legis professionals i dels consells de col·legis només es pot produir en els supòsits previstos per la Llei i té caràcter reglat.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis es relacionen amb l'Administració de la Generalitat per mitjà del departament competent en aquesta matèria. El Govern establirà els mecanismes de coordinació interdepartamental necessaris per a les qüestions relatives als diversos continguts de les professions col·legiades.

4. Els col·legis professionals i els consells de col·legis tenen el deure de lliurar a la Generalitat la informació que aquesta els requereixi en relació a l'exercici de les seves funcions públiques. També tenen el deure d'elaborar i trametre a la Generalitat una memòria anual de la gestió econòmica, de les activitats realitzades, de les altes i baixes produïdes, així com de les altres dades d'interès general que es desprenen del funcionament i de l'actuació dels col·legis. Reglamentàriament s'establiran els requisits de compliment d'aquest deure i de publicitat de la memòria.

5. L'Administració de la Generalitat pot adoptar les mesures d'execució subsidiària necessàries en cas d'incompliment greu per part dels col·legis professionals i dels consells de col·legis de les funcions i obligacions de caràcter públic que aquesta Llei els hi assigni. L'exercici d'aquesta potestat correspon al Govern a instància del departament competent en matèria de col·legis professionals, sempre que el col·legi o el consell de col·legis afectat no hagi subsanat la situació d'incompliment dins el termini assenyalat en el requeriment previ que li ha de fer a aquest el departament esmentat, el qual no podrà ser inferior a un mes.

6. Els col·legis professionals, els consells de col·legis i l'Administració de la Generalitat han de promoure iniciatives per fer efectiva la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes en l'àmbit d'actuacions dels col·legis i consells de col·legis.

7. Els col·legis professionals i els consells de col·legis poden percebre taxes o altres contraprestacions per la prestació dels serveis que corresponen a les seves funcions públiques en els termes que determini la llei.

ARTICLE 68. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS DE LA MATEIXA PROFESSION

1. L'organització col·legial i de consells de col·legis de Catalunya és autònoma respecte de les altres entitats de la mateixa professió existent fora del seu àmbit territorial.

2. Les relacions amb aquestes altres entitats es regeixen pels principis de col·laboració i cooperació voluntàries i s'instrumentalitzaran mitjançant acord o conveni, sens perjudici de les funcions de representació general que, en el seu cas, puguin complir.

TÍTOL VIII. REGISTRES DE COL·LEGIS I D'ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

ARTICLE 69. CREACIÓ I RÈGIM JURÍDIC

1. Es creen el Registre de col·legis i el Registre d'associacions professionals, adscrits al departament de la Generalitat de Catalunya amb competència en matèria de col·legis professionals i altres entitats jurídiques, en els quals s'inscriuen les entitats subjectes a aquesta Llei.

2. En allò no previst per aquesta Llei, l'estructura i el funcionament dels Registres s'ha de determinar per reglament.

ARTICLE 70. ESTRUCTURA DEL REGISTRE DE COL·LEGIS PROFESSIONALS

El Registre de col·legis professionals consta de tres seccions:

- a) La secció de col·legis professionals
- b) La secció de consells de col·legis,
- c) La secció de delegacions d'àmbit territorial català dels col·legis únics d'àmbit estatal.

ARTICLE 71. OBJECTE DEL REGISTRE DE COLLEGIS PROFESSIONALS

En el Registre de col·legis professionals s'han d'inscriure els actes següents:

- a) La constitució dels col·legis o els consells de col·legis.
- b) Els estatuts del col·legi o del consell de col·legis i la seva modificació.
- c) Les normes reglamentàries acordades pel col·legi o pel consell de col·legis.
- d) El nomenament, la suspensió i el cessament dels membres de l'òrgan de govern.
- e) Les delegacions de funcions i els apoderaments generals, com també la seva modificació, revocació o substitució.
- f) L'obertura i el tancament de delegacions territorials.
- g) Els actes de fusió i d'escissió, siguin d'abast territorial o funcional.
- h) La dissolució.
- i) Les resolucions judicials que afectin actes susceptibles de constància registral.
- j) En cas de delegacions catalanes de col·legi únic d'àmbit estatal, la seva obertura i tancament, el seu domicili, les seves normes d'organització i la identitat dels seus representants.

ARTICLE 72. DEURE D'INSTAR LA INSCRIPCIÓ

1. L'òrgan de govern dels col·legis i dels consells de col·legis té el deure d'instar la inscripció dels actes i resolucions relatius a la respectiva entitat que en siguin susceptibles.
2. La inscripció dels actes que hagin de ser aprovats per una resolució administrativa i de les resolucions judicials que afectin actes susceptibles de constància registral pot ser acordada d'ofici per l'òrgan encarregat del Registre, tan bon punt s'hagi dictat la resolució o li consti la fermesa de la resolució. Pot també instar la inscripció de les resolucions judicials qualsevol persona que hagués estat part en el procés.

ARTICLE 73. REGISTRE D'ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

1. En el Registre d'associacions professionals, s'inscriuen:
 - a) L'acord, adoptat per òrgan competent, en virtut del qual una associació, prèviament inscrita en el Registre general d'associacions, decideix acollir-se a aquesta Llei, i s'hi fan constar les dades identificatives d'aquesta.
 - b) Qualsevol fet o acte en virtut del qual una associació professional inscrita en aquest Registre deixi de quedar subjecta a aquesta Llei.
2. Les funcions de verificació de legalitat, d'inscripció i de certificació d'actes que siguin pertinents d'acord amb la legislació d'associacions es duen a terme per mitjà del Registre general d'associacions.

ARTICLE 74. FUNCIONS REGISTRALS

1. L'òrgan encarregat dels registres de col·legis i d'associacions professionals verifica la legalitat del contingut dels actes inscripcionals, d'acord amb el que resulta dels documents en virtut dels quals se sol·licita la inscripció i dels assentaments registrals.
2. No es pot denegar la inscripció de cap acte inscripcionable que compleixi els requisits establerts per la Llei.
3. La inscripció ha de practicar-se, si no hi ha defectes que hagin de ser subsanats, en el termini de tres mesos a comptar de la seva sol·licitud. Transcorregut el termini, s'ha de considerar que la legalitat del contingut de l'acte inscripcionable ha quedat verificada per silenci positiu amb la consegüent obligació de l'òrgan encarregat dels registres de practicar la inscripció.
4. Contra els actes de denegació de la inscripció, es poden interposar els recursos ordinaris establerts per les lleis.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. ACTUALITZACIÓ DE SANCIONS

La quantia de les sancions previstes en aquesta Llei pot ser actualitzada per la Llei anual de pressupostos.

SEGONA. COLLEGIS INTEGRATS PER PROFESSIONALS QUE EXERCIXEN FUNCIONS PÚBLIQUES

Aquesta Llei és d'aplicació als col·legis d'àmbit territorial català integrats per professionals que exerceixen funcions públiques. Aquests col·legis es regeixen pel que estableix aquesta Llei en tot allò en què no afecta a la legislació específica en matèria d'ordenació dels instruments públics i de l'exercici de la funció pública corresponent.

TERCERA. INTEGRACIÓ TERRITORIAL DELS COLLEGIS PROFESSIONALS

L'administració de la Generalitat promourà la fusió voluntària dels col·legis territorials d'una mateixa professió i de col·legis de professions anàlogues.

QUARTA. EFECTIVITAT DE LA COL·LEGIACIÓ VOLUNTÀRIA PER ALS PROFESSIONALS METGES, ODONTÒLEGS I D'INFERMERIA VINCULATS EN EXCLUSIVA AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Per als professionals metges, odontòlegs i d'infermeria al servei de les administracions públiques les funcions dels quals compreguin la realització d'actes professionals que tenen com a destinataris immediats als ciutadans, l'efectivitat del que estableix l'article 36.2 d'aquesta Llei requerirà la declaració prèvia del Govern mitjançant decret a proposta dels departaments competents.

El Govern dictarà el decret esmentat prèvia anàlisi de la incidència que la mesura prevista en l'article 36.2 pugui suposar per a l'interès públic i el funcionament del sistema català de salut.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA. ADAPTACIÓ D'ESTATUTS I ALTRES NORMES COL·LEGIALS

Els col·legis professionals i els consells de col·legis han d'adaptar els seus estatuts i altres normes col·legials a aquesta Llei en el termini màxim de dos anys a comptar des de la seva entrada en vigor. Mentre aquesta adaptació no es produeixi, continuen vigents en allò que no contradiguin la Llei i s'han d'interpretar en tot cas, d'acord amb els nous principis legals.

SEGONA. EXEMPCIÓ DEL REQUISIT DE COL·LEGIACIÓ OBLIGATÒRIA

No és exigible la col·legiació obligatòria en relació amb els col·legis professionals creats amb anterioritat a aquesta Llei, respecte dels quals aquell requisit no és previst sens perjudici del que estableix la disposició transitòria sisena.

TERCERA. PROCEDIMENTS EN TRÀMIT

1. Els recursos en tràmit relatius a actuacions dels col·legis, dels consells de col·legis i de l'Administració de la Generalitat en matèries regulades per aquesta Llei es continuaran tramitant d'acord amb el que preveu la normativa aplicable en el moment de la seva interposició.

2. Els procediments iniciats d'acord amb la normativa anterior continuaran la seva tramitació segons les previsions d'aquesta Llei, sens perjudici de la validesa i l'efectivitat de les actuacions ja realitzades.

3. Els col·legis professionals i els consells de col·legis continuen exercint les funcions delegades de l'Administració de la Generalitat, mentre no s'estableixi altrament d'acord amb el que preveu aquesta Llei.

QUARTA. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS REGISTRALS

Les obligacions registrals previstes en aquesta Llei s'han de complir en els terminis establerts en el reglament que regula l'organització i el funcionament del Registre de col·legis professionals.

CINQUENA. PROFESSIONALS INTEGRATS EN UN COL·LEGI ÚNIC D'ÀMBIT ESTATAL.

Els professionals integrats en un Col·legi únic d'àmbit estatal, incorporats a ell a través de qualsevol de les seves delegacions radicades a Catalunya, sens perjudici de poder mantenir la seva col·legiació actual, podran formar un sol Col·legi d'àmbit català d'acord amb el que estableix aquesta Llei. L'acord de constitució del col·legi s'ha d'aprovar per majoria de vots de les persones assistents en una Assemblea general, a la qual seran convocats tots els professionals amb domicili professional únic o principal a Catalunya, que es pot celebrar a iniciativa del delegat o delegada o quan ho demanin un nombre dels col·legiats esmentats anteriorment igual o superior al 10%.

SISENA. PROCÉS DE REVISIÓ DE L'ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL

El Govern de la Generalitat pot obrir un procés de revisió de l'organització col·legial de Catalunya atenent

els nous requisits que estableix la Llei per a la creació de col·legis professionals. A aquests efectes, el Govern de la Generalitat adoptarà mesures de suport i de foment per a la conversió voluntària dels col·legis en associacions professionals o per facilitar el procés de fusió entre col·legis.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals i les disposicions del mateix rang o de rang inferior en tot el que contradiguin els preceptes d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

1. S'habilita al Govern de la Generalitat per dictar les disposicions de desenvolupament necessàries per a l'aplicació d'aquesta Llei.

2. Aquesta Llei entrarà en vigor a comptar dels tres mesos de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI

1. Memòria justificativa.
2. Text de l'Avantprojecte de llei.
3. Edicte i audiència a les entitats.
4. Informes econòmics.
5. Memòria complementària.
6. Llista de disposicions afectades i taula de vigències.
7. Informe jurídic.
8. Informe interdepartamental.
9. Altres informes.
10. Text de l'Avantprojecte de llei presentat al Consell Tècnic.
11. Observacions.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l'Arxiu del Parlament.